

Pablo Dávalos¹

Las batallas de la globalización: resistencia indígena al Tratado de Libre Comercio en Ecuador

Resumo: O presente texto explora e analisa a atual conjuntura a partir de uma leitura compreensiva que permita a avaliação política da MIE (Mobilização Indígena do Ecuador), definindo o espaço político em que se situa a mobilização indígena: aquele da transformação do Estado industrializante e de Bem-estar que foi construído na década de 1970. Pelo Estado neoliberal, privatizado e vinculado de maneira subordinada ao mercado mundial capitalista, um mercado, ademais, controlado pelas corporações transnacionais. O Estado neoliberal não comporta os supostos de base do Estado de Bem-estar. É um Estado com uma institucionalização mínima, no qual as principais decisões são adotadas pelo mercado e pelas corporações.
Palavras-Chave: Mobilização Indígena; Estado neoliberal; Equador.

Resumen: El presente texto explora y analiza la actual coyuntura a partir de una lectura comprensiva que permita la evaluación política del MIE (Movilización Indígena del Ecuador) definiendo un espacio político en el que se sitúa la movilización indígena: aquel de la transformación del Estado industrializante y de bienestar que fue construido en la década de los años setenta, por el Estado neoliberal, privatizado y vinculado de manera subordinada al mercado mundial capitalista, un mercado, además, controlado por las corporaciones transnacionales. El Estado neoliberal no comparte los supuestos de base del Estado de bienestar. Es un Estado con una institucionalidad mínima, en el cual las principales decisiones son adoptadas desde el mercado y por las corporaciones.
Descriptores: Movilización Indígena; Estado Neoliberal; Ecuador.

Abstract: The present text explores and analyzes in the present conjuncture from a comprehensive reading that allows the political evaluation of the IME (Indigenous Mobilization Equator) defining a political space in which the indigenous mobilization is situated: that of the transformation of the industrializing and welfare State which was constructed in the Seventies by the neoliberal State privatizing and subordinating to the world-wide capitalist market – a market, in addition, controlled by the transnational corporations. The neoliberal State does not share the base of assumptions of the Welfare State. It is a State with a minimum institutionalality, in which the main decisions are made from the market and by the corporations.
Key-words: Indigenous Mobilization; Neoliberal State; Equator.

¹ Pablo Dávalos, investigador ecuatoriano, profesor de la Universidad Intercultural de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (UINPI) y coordinador del Grupo de Trabajo movimientos indígenas em América Latina/CLACSO. Ex viceministro de la Economía del Ecuador.

En 1990 se produce el primer levantamiento indígena en el Ecuador contemporáneo, desde la fecha, el tiempo político del Ecuador ha estado signado por la presencia y constitución del Movimiento Indígena Ecuatoriano (MIE) como sujeto político. Desde mediados de la década de los noventa, en los cuales el MIE se incorpora al sistema político a través del movimiento Pachakutik, el MIE se ha convertido también en el objeto de intervención desde el poder con el propósito de restarle fuerza política, capacidad organizativa y de movilización.

Desde mediados de los noventa, todos los gobiernos intentaron manipular, intervenir y desarticular al MIE, pero el gobierno que se reveló más nefasto para el MIE fue, sin duda, el de Lucio Gutiérrez. Durante ese periodo, la persecución, que llegó incluso al intento de asesinato al presidente de la CONAIE, fue la más feroz, la más implacable.

De ahí que en el transcurso de la destitución de Gutiérrez, hasta noviembre de 2005, el MIE haya entrado en un proceso de reconstitución organizativa interna, que contemplaba la restauración de sus estructuras organizativas, la reelaboración de sus discursos, la redefinición de sus prioridades políticas, y la renovación de sus cuadros directivos, una recomposición cuya fuerza y alcances se evidenciarían en las movilizaciones de marzo de 2006, cuando en el MIE se opera uno de los cambios fundamentales de su proyecto político, al centrarse toda su plataforma de movilización sobre las negociaciones que el Ecuador establecía con EEUU para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC), la elaboración de esta agenda le pone al MIE en una línea de confrontación directa en contra del proyecto estratégico de las elites, a saber, el desmantelamiento del Estado de bienestar por el Estado neoliberal.

En noviembre de 2005 se produce una importante marcha en contra del TLC, y en el mes de marzo de 2006, se da una movilización que paralizó al país durante dos semanas, y que demuestra que el MIE es, a no dudarlo, el actor social y sujeto político más importante que tiene el Ecuador.

El MIE, en esta coyuntura demuestra su comprensión de los territorios políticos en los que opera el poder y traslada la confrontación hacia lo que ellos perciben como el núcleo neurálgico del poder, aquel de reformar al Estado por la vía de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El MIE, con estas acciones, evita pasar por el sistema político, a diferencia de su estrategia de mediados de la década de los noventa en donde busca ingresar directamente al sistema político, y confronta de manera directa a las elites y al gobierno afectando uno de los procesos más fundamentales del Ecuador contemporáneo, y es aquel de la transformación radical de su Estado por la vía del TLC.

El presente texto explora y analiza este proceso a partir de una lectura comprensiva que permita la evaluación política del MIE definiendo un espacio político en el que se sitúa la movilización indígena: aquel de la transformación del Estado industrializante y de bienestar que fue construido en la década de los años setenta, por el Estado neoliberal, privatizado y vinculado de manera subordinada al mercado mundial capitalista, un mercado, además, controlado por las corporaciones transnacionales. El Estado neoliberal no comparte los supuestos de base del Estado de bienestar. Es un Estado con una institucionalidad

mínima, en el cual las principales decisiones son adoptadas desde el mercado y por las corporaciones.

Esta transformación política-jurídica del Estado, es también una transformación económica de las elites, que transaron su proyecto de industrializar al país, por aquel de la especulación, la administración monopólica de los mercados y una relación subordinada con las corporaciones transnacionales.

Sin embargo, para construir ese Estado neoliberal era necesario que las elites generen un consenso sobre la necesidad de legitimarlo históricamente, porque desmantelar al Estado industrializante y de bienestar significaba alterar profundamente las relaciones de poder, cambiando la correlación de fuerzas en beneficio de una burguesía financiera, rentista y monopólica, es justamente esta burguesía financiera el núcleo sobre el cual se articularán otros sectores, como la burguesía comercial, las oligarquías agroexportadoras, la tecnoburocracia vinculada a la banca multilateral, y sobre el que gravitará la responsabilidad de deconstruir la institucionalidad del Estado de bienestar, y convertirse en el núcleo político desde el cual constituir el Estado mínimo neoliberal. Este núcleo dominado por la racionalidad de la burguesía financiera serán las elites que otorgarán sentido histórico, coherencia programática y racionalidad política, a procesos fundamentales como las políticas de ajuste macroeconómico del FMI, o a la firma del TLC con EEUU.

Son estas elites las que fueron generando ese consenso social sobre la necesidad del Estado mínimo neoliberal, a través de una serie de discursos legitimadores que se transmitieron a la sociedad como conceptos necesarios y validados históricamente. De ahí, por ejemplo, tenemos a conceptos como la eficiencia del sector privado opuesta a la corrupción del sector público; o el concepto de disciplina fiscal como requisito para controlar la inflación; estos discursos permitían construir el consenso y administrar los disensos en esta conflictiva tarea de desmantelar toda la institucionalidad de un Estado para reconstruir otra.

Pero al mismo tiempo que se ideologizaba a la sociedad sobre esta supuesta necesidad de un Estado mínimo, era necesario neutralizar, desarticular e incluso destruir las resistencias sociales a esa edificación del Estado neoliberal, de hecho, en los años ochenta el principal núcleo de resistencia estuvo en el sindicalismo agrupado en el Frente Unitario de Trabajadores, FUT. Pero fueron precisamente los trabajadores los más afectados por la transformación del Estado, ellos sufrieron los impactos de las políticas de flexibilización laboral que implicaban la precarización del empleo, la pérdida del poder adquisitivo del salario y la anulación de la capacidad de negociación sindical.

Mientras que antes de las políticas de ajuste en 1983, el salario mínimo cubría la totalidad de la canasta básica familiar, veinte años después, el salario mínimo alcanza a cubrir solamente una tercera parte de esa canasta básica familiar, de manera inversa, los beneficios del capital que antes de las políticas de ajuste participaban de menos de la mitad de la renta nacional, veinte años después controlan dos tercios de la renta nacional. La mayoría de derechos sindicales fueron abolidos en función de la tercerización laboral, es decir, la flexibilización. Este proceso condujo a un debilitamiento orgánico del sindicalismo, y a una derrota estratégica de la clase obrera como sujeto político.

Curiosamente, fue el gobierno de la socialdemocracia ecuatoriana, la Izquierda Democrática (ID), quien más contribuyó a la derrota estratégica al movimiento obrero ecuatoriano. Resquebrajada la capacidad del movimiento obrero de oponerse a la construcción del Estado neoliberal, las elites pasaron a la etapa más agresiva del neoliberalismo que se expresó en el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996).

Es en este gobierno que se desarticula al Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE y se lo reemplaza por el Consejo Nacional de Modernización, CONAM, como institución encargado de la privatización del sector público; se privatizan varias empresas públicas, se desarticula, y debilita aquella institucionalidad creada para proteger la seguridad alimentaria, en un país en el cual más de la mitad de la población es rural; se intenta la privatización de las tierras comunales y del agua de riego a través de una Ley de Desarrollo Agrario; se liberalizan los mercados financieros; se desarticula al Estado a través de las políticas de descentralización, etc.

Pero es justamente en la transición del gobierno de la socialdemocracia y el gobierno de Durán Ballén que emerge con fuerza el MIE. El MIE se involucra en una disputa política en la que estaba en juego el carácter del Estado. Para las elites estaba claro que había que clausurar el Estado de bienestar y reemplazarlo por el Estado neoliberal; para el movimiento indígena, el Estado neoliberal era una amenaza a su propia pervivencia, y lo pudieron comprobar en 1994 cuando tuvieron que realizar un levantamiento indígena para evitar la aprobación de la Ley de Desarrollo Agrario que destruía de manera explícita las formas comunitarias de propiedad.

En efecto, las políticas de libre mercado, que están detrás del proyecto del Estado neoliberal, y que garantizan en realidad el dominio de los monopolios, son fatales para la vida comunitaria, de la misma manera que las políticas de flexibilización laboral impuestas por el gobierno de la Izquierda Democrática (1988-1992), fueron fatales para el empleo, el ingreso y la organización sindical.

El MIE comprendió rápidamente que el territorio de disputa era el Estado, pero no era una disputa en términos jurídicos ni contractuales, a pesar de que el MIE haya planteado la necesidad de una reforma política para crear el Estado Plurinacional, era, y es en realidad, una disputa política cuya definición, paradójicamente, estaba en el campo de la economía, y era así porque las transformaciones que las élites estaban llevando a cabo se articulaban desde las políticas de ajuste estructural del FMI y de reforma estructural del Banco Mundial.

En otros términos, el campo de disputa política era aquella conflictividad que la economía política clásica describía como lucha de clases, es decir, como un campo de conflictividad histórica, en el que se enfrentaban dos proyectos históricos contradictorios y en el que el rol que debía asumir el proletariado era asumido por los movimientos sociales, y fundamentalmente, el movimiento indígena.

Es una situación sui generis porque el movimiento indígena no comparte los mismos supuestos epistemológicos que la clase obrera, pero que al entrar en conflicto con las elites asume un rol histórico de resistencia a esas elites (la teoría clásica diría que los movimientos sociales, y el MIE, eran el otro polo de la contradicción del capitalismo). Pero al no compartir esos supuestos de clase que identifican al

proletariado, es más difícil para las elites enfrentarlos y neutralizarlos políticamente, de ahí que desde la emergencia política del MIE, las elites hayan utilizado los mismos mecanismos que utilizaron para dividir, cooptar y destruir la organización sindical, pero sin éxito.

Del levantamiento de 1990, hasta los levantamientos indígenas de 1999, es la resistencia al ajuste y reforma estructural, el eje político sobre el cual se moviliza el MIE y que provocan su transformación de actor social en sujeto político. La conflictividad está en la disputa del carácter económico que asume la construcción del Estado neoliberal.

Sin embargo, los momentos más álgidos de esa conflictividad expresan y evidencian un territorio conquistado por las elites. El Estado de 1990, no existe más a mediados de la primera década del año 2000. Las resistencias y movilizaciones sociales inauguran un periodo de crisis institucional, e interrumpen al proyecto de las elites, y eso se expresa de manera nítida en la coyuntura de fines del año 1995, cuando el MIE con varias organizaciones sociales derrotan al gobierno de Sixto Durán Ballén en la consulta popular que se había planteado para legitimar la privatización de la seguridad social, entre otros aspectos.

El Estado industrializante y de bienestar social no existe más, pero tampoco existe el Estado neoliberal. Lo que existe es una amalgama contradictoria y conflictiva de un Estado represivo, autoritario, vertical y jerárquico, que conserva algunas de las instituciones del Estado de bienestar y algunas parcelas que se resisten a la privatización, que políticamente se expresa en el régimen presidencialista, y en una institucionalidad atravesada de una profunda conflictividad.

Es decir, veinte años después del experimento neoliberal se constata su fracaso en toda la línea. Había entonces que articular, desde las élites, una estrategia que permita salvar el proyecto del Estado neoliberal incluso al costo de una permanente crisis política. En efecto, ante las resistencias sociales a las políticas de ajuste, las elites utilizan al sistema político para proteger, conformar y consolidar su proyecto de Estado neoliberal, y a medida que las resistencias sociales impiden esa construcción neoliberal, las elites comprenden que tienen que sacrificar al sistema político para salvar al Estado neoliberal, y para ello realizan una maniobra decisiva: separan la política de la economía.

Con esta maniobra, transfieren la conflictividad que se genera al dismantelar al Estado de bienestar al territorio de la política, entendida ésta en su sentido más restringido, esto es, como el ámbito de acción del sistema político, es decir, los partidos políticos, las elecciones y la institucionalidad electoral.

Al tiempo que transfieren la conflictividad hacia el sistema político, intentan proteger su proyecto del Estado neoliberal convirtiéndolo en un asunto técnico y económico. Gracias a ello, logran, por ejemplo, la independencia del Banco Central, la aprobación de leyes fundamentales para el estado neoliberal, como la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, conocida como Trole I, y que garantiza, entre otros aspectos, el funcionamiento de la dolarización de la economía, la Ley Para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, conocida como Trole II, que crea un marco jurídico para la privatización de sectores públicos, como el energético; la Ley de Responsabilidad, Estabilidad, y Transparencia Fiscal,

que establece un fondo de recursos petroleros para la recompra de la deuda externa, y que limita la inversión pública, etc.

Esta maniobra de separar artificialmente la economía de la política, se revela políticamente eficaz, porque, de una parte, otorga un blindaje a las leyes que definen y codifican al Estado neoliberal, tecnificando los discursos que permiten su constitución; y, de otra, metaboliza en función propia las conflictividades sociales y las resistencias, neutralizándolas. Los discursos técnicos no se discuten desde la política sino desde la técnica, pero ese es un territorio dominado por una tecnoburocracia que es precisamente la encargada de diseñar los mecanismos institucionales del Estado neoliberal, y que ejerce un control hegemónico sobre los discursos económicos y de desarrollo.

De esta manera, la movilización social puede generar inestabilidad al sistema político, pero no afecta al Estado neoliberal. Gracias a esta maniobra se pudo dolarizar a la economía, sin que las conflictividades sociales puedan alterar la imposición del nuevo sistema monetario. De esta manera, se pudo imponer la disciplina fiscal que implica la reducción del gasto público en las áreas sociales con pretexto de combatir la inflación y provocar una grave desinversión interna sin que exista una presión social en contra; de esta manera, se pudo destruir la escasa capacidad de negociación sindical existente en el sector público aprobando la Ley de flexibilización laboral con el pretexto de salvaguardar la propiedad pública, criminalizando incluso a los sindicatos públicos y sin generar solidaridades de clase; de esta manera, se posibilitó la privatización de sectores estratégicos como el petróleo, el agua, la energía, las telecomunicaciones, la seguridad social, los servicios públicos.

De esta manera, se pudo dismantelar la capacidad regulatoria del Estado a través de las políticas de descentralización con el consenso social generado a través de las políticas de participación local. Esto permite explicar que las movilizaciones sociales, durante las décadas de los ochenta y noventa, a pesar de su enorme capacidad de convocatoria, hayan sido neutralizadas en sus efectos prácticos de detener el avance del proyecto neoliberal. La conflictividad del sistema político nunca atravesó aquellas murallas que se habían construido en torno a la edificación del Estado neoliberal.

La inestabilidad política no significó que se haya detenido en algún momento la constitución del Estado neoliberal. Esto significó un verdadero hallazgo para las élites, mas, a decir verdad, no se trató de una estrategia pensada y asumida por las élites ecuatorianas, sino de un formato que vino desde las multilaterales, fundamentalmente el Banco Mundial, y que las elites lo adoptaron hábilmente.

En efecto, esa ruptura entre economía y política, y posteriormente esa transferencia de la conflictividad social hacia el sistema político, fue concebida e instrumentalizada desde el Banco Mundial. No se trata de una reflexión hecha *ex professo* para el caso ecuatoriano, sino de la necesidad de dar una respuesta histórica al fracaso político que representaban las imposiciones del FMI en todas partes del mundo.

La crítica a esa vertiente ortodoxa y fundamentalista del FMI, que a la postre estaba minando la posibilidad de que se construya el Estado neoliberal, provino

justamente desde el mismo Banco Mundial. Con más lucidez y con más trayectoria en la política, el Banco Mundial comprendió que aquellas políticas definidas en el Consenso de Washington, necesitaban del consenso social para tener éxito.

Y ese consenso social podía ser construido desde un ámbito en el cual el Banco Mundial tenía amplia experiencia, aquel del desarrollo. El Estado neoliberal se propuso, entonces, como una nueva visión de desarrollo, y el desarrollo es, sobre todo desde el Banco Mundial, una cuestión eminentemente técnica. Por lo tanto, había que ubicar los nudos críticos que impedían ese desarrollo, entendiendo, claro está, que por desarrollo ahora había que considerar a los mercados como eficientes mecanismos asignadores de recursos y como óptimos espacios de la regulación social. En esa nueva visión del desarrollo no hay espacio para el Estado y para lo público.

En otras palabras, la retórica liberal expresada como discurso del desarrollo podía lograr el consenso social ahí donde había fracasado el FMI. Esos nudos críticos que impedían la transición a la modernidad y al desarrollo estaban, según la nueva concepción del Banco Mundial, en aquellas instituciones que aún regulaban los mercados y que aún pretendían regular a las sociedades, es decir, en esos rezagos del Estado de bienestar que resistían los embates de la privatización.

Por lo tanto, había que realizar cambios institucionales que permitan a los mercados operar en condiciones de transparencia y eficacia suplantando al Estado en esos espacios. Esos cambios institucionales fueron asumidos y propuestos por el Banco Mundial como cambios o reformas estructurales. Es más, para ayudar a los países a que lleven adelante las reformas estructurales, el Banco Mundial creó una metodología denominada "Estrategia de Asistencia País". El Ecuador, será sujeto de una Estrategia de Asistencia País, por parte del Banco Mundial, en dos oportunidades, en junio de 1993, en el contexto del gobierno más agresivamente neoliberal, y en abril de 2003, cuando la alianza del MIE con Lucio Gutiérrez gana las elecciones, y el Banco Mundial considera fundamental institucionalizar al MIE comprometiéndolo con la reforma estructural.

La reforma estructural identifica los sectores a ser intervenidos dentro del sector público, para debilitarlos y luego posibilitar la transferencia de esas competencias al sector privado. Como metodología, la reforma estructural permite a las elites, en el caso ecuatoriano, provocar una bilocación en las relaciones de poder, de una parte, aparentan disputar el poder en el territorio del sistema de partidos y de elecciones, y, de otra, continúan su tarea de dismantelar al Estado de bienestar y proponer en su lugar al Estado neoliberal.

Las elites comprenden que es necesario rearticular su estrategia gracias a un acontecimiento político clave que es la consulta popular de fines de 1995, en los que la movilización social derrota al proyecto neoliberal. Nunca más las elites acudirán al expediente de la consulta popular para definir los temas claves de la reforma estructural del Estado neoliberal, y, en lo posible, la rehuirán como a la peste.

De otra parte, es el mismo Banco Mundial, quien en su panoplia de conceptos generadores de consenso, posiciona discursos como aquel de la participación local para consolidar la descentralización y por tanto el debilitamiento del Estado; ese

mismo discurso de la participación local, es utilizado en una versión de desarrollo étnico para tratar de convertir al MIE de sujeto político en actor de desarrollo, y, por tanto, a la dirigencia política del MIE en tecno-burocracia del etno-desarrollo, y a las organizaciones indígenas en ONG's de desarrollo, tal fue el objetivo que tuvo el Banco Mundial cuando generó el Proyecto de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador, PRODEPINE. Donde fracasaron las elites para cooptar, dividir y desarticular al MIE, tomó la posta el Banco Mundial.

Entonces, al producirse esa bilocación del poder entre política y economía, era natural que el MIE sienta que se estrella contra un muro, cuando a pesar de sus levantamientos y movilizaciones no logra cambios sustanciales en las relaciones de poder.

El Estado de bienestar sigue en pleno proceso de desmantelamiento, las elites acumulan más poder, y la economía ecuatoriana entra en uno de sus procesos de privatización más radicales cuando se desterritorializa la capacidad soberana del Estado en beneficio de las corporaciones transnacionales, conforme consta en el Convenio de Protección a las Inversiones firmado con el gobierno norteamericano a mediados de los años noventa. La signatura de este convenio da cuenta que las elites ecuatorianas estaban dispuestas a negociar la soberanía en función de sus propios intereses. El TLC con EEUU que intentarán suscribir más tarde es, para las elites ecuatorianas, un escalón más en su camino de desmantelar al Estado de bienestar, incluso al precio de la soberanía nacional.

Ahora bien, el MIE, en una estrategia que a la postre lo debilita, decide, a mediados de la década de los noventa, entrar en el sistema político y con esta decisión a la larga legitima los mecanismos de poder que han generado las mismas elites. Su participación dentro del sistema político está desconectada de sus estructuras organizativas y aparece de manera fragmentada, unilateral y formando parte del desgaste que sufre todo el sistema político.

La autonomización de la economía de la política que operan las elites ecuatorianas, ni es total, ni es perfecta, ni tampoco es ideal, es simplemente una estrategia política que tiene sus límites y sus posibilidades, fuera de ellas se hacen necesarios otros mecanismos. Finalmente, las decisiones que se necesitan para construir al Estado neoliberal siempre tienen que pasar por las aduanas del sistema político, siempre tienen que ser legitimadas por ese sistema político, porque es el formato del Estado liberal el que sustenta la toma de decisiones en la contractualidad, y el sistema político, con todos los defectos que puedan atribuírsele, expresa esa contractualidad, ese pacto social; pero desde que las elites decidieron pagar la factura de esta autonomización de la economía de la política, el sistema político está en crisis permanente, y lo está porque las elites sobrecargaron al sistema político.

El sistema político pierde legitimidad social. La corrupción, las prácticas clientelares, las prácticas patrimonialistas, a la larga terminan por deslegitimar al sistema político, y si el sistema político pierde legitimidad no puede procesar las reformas económicas que son necesarias para construir al Estado neoliberal. Las leyes que tienen que legitimar al Estado neoliberal, muchas veces no podían ser aprobadas por la crisis institucional del sistema político.

Las reformas institucionales no podían ser procesadas por el sistema político, justamente por su crisis, provocando serios impasses en la construcción del Estado

neoliberal. Por ejemplo, el sistema de pensiones no puede ser privatizado, tanto por la resistencia de los actores sociales, en la ocurrencia el fuerte movimiento de jubilados, cuanto por la oposición de los partidos políticos a desgastar su imagen aprobando leyes que implicarían la erosión de su perfil social. O el caso del petróleo, que habida cuenta del sindicato público de los trabajadores del petróleo, habían evitado con relativo éxito el desmantelamiento de la empresa estatal y la transferencia de los principales campos petroleros a las corporaciones transnacionales.

Es en ese contexto, de agotamiento de una estrategia que se había revelado bastante útil, es decir, aquella de separar lo político de lo económico, y que había generado una profunda crisis institucional, cuando las élites reciben la boya del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU. Este tratado se revela a las elites como el mecanismo más eficaz para provocar aquellos cambios fundamentales para su proyecto del Estado neoliberal.

El Tratado de Libre Comercio con EEUU es el dispositivo ideal porque se inserta en un ámbito técnico para provocar los cambios políticos que no habían sido procesados por el sistema político ecuatoriano. Hay que recordar que las negociaciones del TLC implican a todos los ámbitos del Estado, de hecho comprenden 19 mesas, de las cuales solamente 5 atañen a mecanismos compensatorios de aduanas, aranceles e impuestos al comercio, todas las demás afectan profundamente a la institucionalidad misma del Estado, y atraviesan el ámbito financiero, laboral, de medio ambiente, de servicios, de resolución de conflictos, de tribunales de arbitraje, propiedad intelectual, etc.

Las elites comprenden que una vez suscrito el TLC, no queda otra opción que armonizar las leyes ecuatorianas a este tratado y con ello terminar de construir al Estado neoliberal. Se trata de una oportunidad de oro que no puede ser desperdiciada.

Ahora bien, hay que recordar que los EEUU optan por el bilateralismo una vez que fracasó su estrategia multilateral de liberalización comercial tanto en la ronda Cancún de la OMC, cuanto en la ronda Miami del ALCA, efectuadas ambas a fines del año 2003. El fracaso del multilateralismo implica el paso al bilateralismo en el que las asimetrías de poder son tan grandes que los países que entran en la órbita de EEUU no tienen ninguna posibilidad de negociar sus posiciones, en efecto, se limitan a aceptar las propuestas hechas por EEUU o a ser excluidos y reemplazados por otros países.

La política exterior de EEUU en realidad es geopolítica y está pensada, estructurada e impuesta en función de los requerimientos de hegemonía mundial que tienen los EEUU. No se puede deslindar la visión geopolítica y geoestratégica que tienen los EEUU en cualquier tipo de negociación. En el caso del área andina, los EEUU visualizan a la región como un espacio conflictivo y que amerita estrategias de intervención.

Es pensando en esas estrategias de intervención que se diseñó y se financió el Plan Colombia, y es desde esa lógica de intervención que se establecen las negociaciones de los tratados de libre comercio con Colombia, luego con Perú y, finalmente, con Ecuador. Las elites ecuatorianas están conscientes de que el "cupón" que EEUU les otorgó se debió a la coyuntura de la conflictividad de la región

andina, en el que el Ecuador tendrá que jugar un rol clave habida cuenta de su posición geográfica. Pero no les importó involucrar a su país en la conflictividad regional a cambio de que el TLC les ayude en su tarea de dismantelar el Estado de bienestar y finalizar la construcción de su Estado neoliberal.

Las elites saben que la situación política ecuatoriana está en un impasse de difícil resolución. El sistema político ha perdido legitimidad, y la aprobación de las leyes que hagan factible al Estado neoliberal generan más conflictividad aún, que a la postre terminan acotando los espacios de acción y decisión del sistema político ecuatoriano.

Al abrirse las negociaciones del TLC, las elites pueden insertar en ellas, todas las reformas pendientes. Por ello, no es de extrañar la posición inicial del ex Presidente Lucio Gutiérrez de que el TLC "va porque va". No era solo un acuerdo comercial el que se estaba negociando, en realidad, eran las reformas estructurales que permitían la vigencia del Estado neoliberal, lo que está en juego.

Estas negociaciones del TLC tenían, además, la virtud de presentarse como un asunto eminentemente técnico y exclusivamente comercial. Para blindar esas negociaciones se acudió al expediente del secretismo y se suscribió una cláusula de confidencialidad que hacía imposible cualquier tipo de discusión sobre los temas tratados al interior del TLC, por la carencia de información.

Estas negociaciones tenían otra virtud y es que se negociaban en un espacio libre de toda conflictividad política. En las negociaciones nunca estuvieron representantes de los movimientos sociales, o de los partidos políticos y tampoco se abrieron los espacios de comunicación a la ciudadanía para transparentar sus negociaciones. De hecho, incluso el sistema político había sido puesto entre paréntesis por el TLC, el rol que jugaría el Congreso ecuatoriano sería solamente el de aprobarlo por mayoría simple y en una sola discusión parlamentaria.

Por ello, desde fines del año 2003 en el que EEUU propone al Ecuador firmar el TLC, y desde inicios de 2004 en el que se nombra al primer negociador oficial, las elites tratan de otorgar una cobertura de protección política a este espacio de negociación, abstrayéndolo de los conflictos que rodean al sistema político.

De hecho, es de resaltar que durante ese periodo existe un fuerte debate nacional alrededor de la necesidad de la reforma política, el mismo Presidente transitorio Alfredo Palacio, propone varias veces al Congreso Nacional, tramitar la reforma política, los movimientos ciudadanos se involucran de lleno en las discusiones de la reforma política, los partidos políticos de su parte tratan de bloquear o neutralizar los alcances de la reforma política, los medios de comunicación se convierten en cajas de resonancia de la reforma política, pero en todo este debate jamás se propuso en la agenda de la reforma política discutir y transparentar las negociaciones del TLC, es decir, mientras más hablaba la sociedad ecuatoriana de reforma política, más se alejaba de los temas centrales que implicaban la transformación de su propio Estado y que estaban siendo negociados en el TLC.

El debate político servía como un simulacro para que el verdadero trabajo lo hagan los equipos negociadores del TLC. En efecto, los equipos negociadores del TLC tenían una cobertura de legitimidad que se expresaba en su lenguaje técnico y economicista, exactamente como fueron el inicio de las negociaciones de las Cartas

de Intención con el FMI, en el que el lenguaje técnico escondía los cambios en las relaciones de poder.

De ahí que todas las rondas de negociación que se abrieron desde el año 2004 hayan tenido una especie de impunidad política. Nunca se rindió cuentas a nadie, y el sistema político entraba en el debate electoral olvidando convenientemente los temas conflictivos, sobre todo el TLC, y el espacio electoral tiene la virtud de despolitizar el debate poniendo entre paréntesis los problemas más candentes y generando un escenario de espectáculo y banalización de la política.

Cuando el gobierno de Perú firma el TLC con EEUU, y luego lo firma Colombia, las elites ecuatorianas comprenden que están en la recta final y que su siguiente paso en realidad será más fácil y de tipo más operativo. Una vez firmado el TLC, el sistema político tendrá que armonizar el sistema jurídico vigente al TLC, y se habrá dado un paso fundamental en la construcción del Estado neoliberal.

El idilio de las élites con el TLC tiene su primer susto en noviembre de 2005 cuando el MIE se moviliza centrando su agenda precisamente en las negociaciones del TLC. Esta movilización indígena, trata de ser invisibilizada y relativizada. Después de todo, el MIE luego de su paso por el sistema político está tan cuestionado y tan desestructurado, según las élites, que sus movilizaciones de fines del año 2005 bien pueden ser asumidas como un intento desesperado de recomponerse habida cuenta que el año 2006 es un año electoral.

Para inicios del año 2006, y una vez cerradas las negociaciones de Perú y Colombia, las elites ecuatorianas entran de lleno en las negociaciones finales para suscribir a su turno el TLC con EEUU, pero es justamente en ese momento que reaparecen las movilizaciones indígenas y esta vez con una fuerza y una contundencia que desarman al sistema político y a las elites.

Es todo su proyecto de modernización neoliberal el que corre el riesgo de venirse abajo con las movilizaciones indígenas del mes de marzo de 2006. Las elites que no saben cómo asumir estas movilizaciones, intentan mecanismos desesperados de salvar el proceso del TLC. En primer lugar, se resisten a las presiones por la democratización de las negociaciones del TLC.

Se produce una estrategia en dos frentes, en el primer frente está el gobierno y su equipo político y militar que se enfrentan a las movilizaciones desde la manipulación del discurso y la violencia. Las movilizaciones indígenas son reprimidas ferozmente, y el discurso oficial trata de deslegitimar a la dirigencia indígena acusándola de desestabilizar al país.

No solo ello, es desde el discurso oficial, que se acuden a discursos racistas que disparan aquellos resortes reprimidos de exclusión y discriminación que son inherentes a una sociedad tan racista como la ecuatoriana, y que generan una separación real entre las movilizaciones indígenas y el resto de la sociedad. Sobre esta separación provocada por el discurso racista opera el segundo frente, tratando de evitar las solidaridades sociales y las posibles alianzas que puedan proyectar las movilizaciones indígenas a un ámbito nacional y poner en riesgo incluso la estabilidad del régimen.

En este segundo frente están las cámaras empresariales y la mayoría de los medios de comunicación. Sobre la violencia física, simbólica y semiótica que ejerció

el gobierno en contra del movimiento indígena, se inscribe la estrategia de este segundo frente que trata de acotar el alcance político de las movilizaciones indígenas generando tres ideas fundamentales, que también serán recogidas por el gobierno: la primera es que se está en pleno proceso de negociación y mientras no se haya suscrito el TLC nada está negociado, la segunda es que el TLC es un asunto técnico y estrictamente comercial, ocultando el hecho de que el TLC va a transformar radicalmente al Estado; y, tercero, de que el punto central del conflicto del TLC es la mesa agraria por cuanto son campesinos indígenas de la sierra los que se movilizan en contra del TLC, pero que en la mesa agraria los principales perjudicados no serían los campesinos de la sierra, sino los campesinos de la costa, que no están movilizadas, mientras que los campesinos de la sierra tendrían la oportunidad de exportar su producción a EEUU, escamoteando el debate sobre el agua, biodiversidad, conocimiento ancestral y territorialidad.

Sobre esta discursividad, se instala otra y es aquella de que el TLC es una oportunidad que el país no puede perderse, para posicionar y reforzar esta idea, se acude al terrorismo económico: las elites declaran que si no se firma el TLC las consecuencias para el país son graves, por las pérdidas de empleos, de ingresos y de oportunidades.

Las elites llegan incluso a disputar el espacio de la movilización social organizando ellas sus propias marchas. En su lógica empresarial, sus marchas tuvieron un alto costo económico y nulo beneficio político, de ahí que se hayan preguntado que si una marcha de tres horas tuvo un costo determinado, cuánto podrían costar las movilizaciones indígenas que ya estaban en su segunda semana, y, por tanto, quiénes las estaban financiando.

El gobierno recoge esa argumentación y declara que son ONG's las que estarían detrás de las movilizaciones indígenas e insinúa incluso la participación del gobierno de Venezuela generando roces diplomáticos con el vecino país. Es decir, las elites cometen el error de sobrecargar políticamente al TLC en su afán desesperado de salvar a las negociaciones y ceden la iniciativa estratégica al MIE. No tienen estrategia. No tienen agenda. No saben cómo resolver la crisis. Empiezan una fuga hacia delante que termina comprometiendo más aún su proyecto. Las respuestas que las elites y el gobierno producen frente a la movilización del MIE son primarias y evidencian que fueron sorprendidos y rebasados en su capacidad de análisis y de procesamiento del conflicto.

Las movilizaciones indígenas tuvieron el acierto de ir al núcleo fuerte de la conflictividad social: el Estado neoliberal. La demanda indígena, además, es inapelable: que se democraticen las negociaciones del TLC llamando a una consulta popular. Para llamar a una consulta nacional se deben cumplir dos pasos previos, primero, suspender las negociaciones; y, segundo, transparentar el proceso.

Con esta agenda, el MIE llega al centro neurálgico de todo un proceso que atañe a la conformación del Estado, y lo desarticula. Gana un espacio político y obliga al poder a ceder posiciones. El MIE revela al país que está en juego el proyecto de un Estado neoliberal detrás del TLC, y que no es solamente un asunto comercial de preferencias arancelarias, de haber sido ese el caso, no se habría explicado la presencia de 19 mesas de negociación, en ámbitos tan disímiles y alejados del libre comercio.

Las elites, incluido el gobierno, en esta coyuntura tendrían que revelar todo lo que había sido negociado hasta ese momento, lo que demanda una voluntad de transparentar y poner a discusión esa agenda oculta que implicaba la transformación del Estado, y la de posponer la definición e incluso transferirla a que esa decisión sea tomada democráticamente. Una alternativa imposible para las elites y que estaba excluida del horizonte de sus expectativas. Ya se habían tardado casi una década en procesar los cambios jurídicos para dismantelar al Estado de bienestar, no podían poner en juego todo su proyecto histórico en esta coyuntura. Para las elites no había y no hay elección posible, el TLC “se firma porque se firma”.

Luego de la experiencia de 1995, las elites tienen terror a todo lo que implique consulta, referéndum o plebiscito. Entonces, ¿cómo enfrentar el pedido de democracia y de transparencia hecho desde el MIE? ¿Cómo deslegitimar a la democracia si es parte fundamental del procesamiento de conflictos que legitiman a la estructura del poder? Las elites estaban prisioneras de su propio laberinto. Habían utilizado el discurso de la democracia para legitimar sus relaciones de poder, y ahora tenían que responder con violencia y autoritarismo a los pedidos de democracia y de transparencia, demostrando que, en realidad, la democracia es más un recurso estratégico del poder, que una opción de participación social.

La posición de las elites y del gobierno es clara: el TLC no se transparenta, ni se democratiza, “se firma porque se firma”. Al no poder contestar a los pedidos de democracia y de transparencia, el mecanismo es el de deslegitimar al MIE. La confrontación a las demandas del MIE también son evidentes: las movilizaciones, según las élites y el gobierno, son desestabilizadoras y corresponderían a un “plan oscuro”, con esta argumentación se quiere eludir el plano de la confrontación y descalificar el pedido del MIE. La intención es que descalificando al MIE quizá puedan evitar responder a sus demandas de democracia y de transparencia.

Las elites, incluso, creen haber descubierto el *letí motiv* de las movilizaciones indígenas: su dirigencia quiere, en realidad, catapultarse para las elecciones, y no se dan cuenta que con esta maniobra corren el riesgo de sobrecargar el próximo escenario electoral y convertir a las elecciones en un plebiscito alrededor del TLC.

Como puede verse, ni el gobierno ni las elites tenían una agenda política para enfrentarse al MIE en esta coyuntura. Su única propuesta política fue la represión. El recurso a la violencia lo que en realidad significa es la pérdida de poder. La movilización indígena los había rebasado y había agotado los repertorios de las elites y del Estado para procesar este conflicto y había puesto en riesgo el ejercicio del poder.

La cuestión es que el MIE logra, con su movilización, posicionar con tal fuerza el TLC que la sociedad en su conjunto es obligada a reflexionar, discutir, debatir y exigir transparencia en el proceso. La movilización indígena obliga a que la agenda de las elites y del gobierno converjan hacia la necesidad de salvar al TLC.

Ello desnuda los simulacros de la reforma política y muestra de manera fehaciente el carácter de clase que siempre tuvo el gobierno transitorio de Alfredo Palacio. Ello implica también que el TLC se traslade del ámbito técnico hacia el político, algo que las elites habían evitado a toda costa desde el inicio de las

negociaciones. Pero el espacio ha sido abierto, el TLC se ha convertido, para pesadilla de las elites, en un asunto político, el debate nacional gira alrededor del TLC, pero en términos políticos.

De ahí que se insista a través de todos los mecanismos posibles de que el TLC es en realidad un asunto técnico y comercial. En el supuesto de que el espacio abierto por el MIE se resista a aceptar los contenidos impuestos desde las elites, los medios de comunicación cambian el locus de discusión, y lo centralizan en el MIE. La intención es sobreexponer al MIE para convertirlo en flanco de posteriores ataques. Pero es difícil cambiar los sentidos del debate político cuando el MIE ha logrado posicionarse con la fuerza de dos semanas de movilizaciones al TLC como el asunto políticamente más crucial que debe resolver la sociedad ecuatoriana.

Ahora bien, la primera tarea de las elites y del gobierno será la de cerrar el espacio abierto por la movilización indígena. La segunda es la de acotar políticamente al MIE, y la tercera es articular una estrategia que permita su neutralización. Luego de dos semanas de movilización, el MIE realiza un repliegue estratégico con la amenaza de retomar las movilizaciones declarando un levantamiento general, y, además, con una declaración que da cuenta de los niveles de conflicto y de la crisis del sistema político ecuatoriano: el desconocimiento al gobierno transitorio de Alfredo Palacio, es decir, la declaratoria de desobediencia civil. Esta declaratoria tiene como objetivo impedir los acercamientos que el régimen puede realizar a los gobiernos seccionales manejados por el movimiento indígena, con la intención de comprar con recursos fiscales adhesiones en las bases del MIE y romper la unidad organizativa demostrada en las movilizaciones.

Ahora bien, es necesario indicar que el MIE demostró mucha sagacidad en esta coyuntura porque si bien su movilización se centró en el TLC, el segundo punto de su agenda es tan conflictivo como el TLC, y hace referencia a la decisión de declarar la caducidad de contrato entre el Estado y la petrolera norteamericana Oxy.

Si el gobierno transitorio de Alfredo Palacio, acoge el pedido del Procurador del Estado y declara la caducidad de ese contrato, la firma del TLC con EEUU es imposible. En varias declaraciones públicas, personeros del gobierno americano advirtieron sobre los peligros de que el Estado ecuatoriano correría si declara la caducidad del contrato con Oxy, uno de esos peligros es que el Ecuador no sería parte de las negociaciones del TLC y que además perdería las preferencias arancelarias que EEUU había entregado a los países andinos, el ATPDEA.

Entonces, si el gobierno decidía no dar paso a la primera propuesta de no suscribir el TLC, la segunda era menos factible aún de cumplirse, porque entraba en directa contradicción con la intención del gobierno de que el TLC "se firma porque se firma". Pero en algún momento el gobierno tendrá que dar salida al impasse provocado por la petrolera Oxy. Si la salida del gobierno favorece a la petrolera, sus márgenes de gobernabilidad se acotarán aún más. En otras palabras, el régimen transitorio de Alfredo Palacio, no tiene espacios políticos de acción, no tiene capacidad de generar iniciativas de gobernabilidad, y tampoco tiene posibilidades de lograr consensos sociales para procesar los conflictos. Es un régimen liquidado políticamente, y cuya vigencia como gobierno depende más de factores

aleatorios que de su propia dinámica. El régimen de Palacio recuerda al gobierno de Mahuad en la coyuntura de julio de 1999, cuando el levantamiento indígena impidió la imposición de un paquete de ajuste y liquidó las posibilidades políticas de Mahuad. Meses después Mahuad sería derrocado por otro levantamiento indígena.

Si el régimen decide firmar el TLC con EEUU, y en concordancia con ello, renegocia los contratos petroleros favoreciendo a la petrolera norteamericana Oxy, el espacio político para defender estas decisiones es inexistente. La presión social que puede originarse en contra de esas decisiones, va a encontrar a un régimen tan debilitado que no tiene capacidad de enfrentar a esa presión social, amén del uso de la fuerza que será proporcional a su debilidad, y que no tiene espacios de maniobra incluso para sostenerse. El gobierno transitorio, tendría, entonces, los días contados. Tal es la consecuencia de la movilización indígena.

Ahora bien, surgen varias cuestiones relativas a la dinámica interna del MIE que posibilitaron tanto la elaboración de sus discursos cuanto de sus movilizaciones: ¿cuál fue el proceso que permitió que el MIE traslade el *focus* de su atención hacia el TLC? ¿Porqué de todas las demandas del MIE fue justamente aquella de oponerse al TLC la que se privilegió y la que sirvió de elemento estructurador de su movilización? ¿Cómo descubrió el MIE que detrás de la firma del TLC en realidad estaba todo un proyecto de constitución del Estado neoliberal?

Existe evidentemente una transformación cualitativa de la agenda del MIE desde el levantamiento de 1990, hasta las movilizaciones de marzo de 2006 en contra del TLC. Habría que recordar que los puntos centrales de la agenda de 1990 tenían que ver con la conflictividad agraria y la disputa de tierras. Meses antes del levantamiento de 1990, se había producido el secuestro de algunos directivos del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, INDA (antes IERAC), en virtud del cual se habían suscrito varios ofrecimientos para solucionar la presión por la tierra. Se trataban de los "Acuerdos de Sarayacu", que el gobierno de la Izquierda Democrática, jamás tuvo la intención de cumplir. El levantamiento indígena de 1990, tuvo entonces una dinámica en la cual la lucha por la tierra era el elemento fundamental.

Cuatro años después, el movimiento indígena tendría que cambiar las prioridades de su agenda por aquellas de oponerse de manera radical al neoliberalismo. El gobierno de Durán Ballén, al proponer la conformación de los mercados de tierras y de agua, estaba liquidando las formas comunitarias de tenencia de la tierra. El movimiento indígena en esta coyuntura descubre el alcance real que tiene la propuesta neoliberal y cambia en consecuencia el eje de su discurso de movilización.

Durante la década de los noventa, la plataforma del movimiento indígena se irá transformando en conformidad de su transformación política y su involucramiento en ese campo de conflictividades que se había definido como lucha de clases, de ahí que los ejes de las movilizaciones sean siempre la resistencia y la oposición a las políticas de ajuste del FMI. El punto más alto de esas movilizaciones está en el levantamiento de julio de 1999, cuando se enfrentan de manera exitosa al paquete de ajuste que el gobierno de ese entonces había decretado, y, de paso, liquidan políticamente a ese régimen.

Pero en las movilizaciones de 2006, el movimiento indígena se enfrenta de manera directa contra el proyecto de las elites de reconstruir el Estado hacia un formato neoliberal, y en contra del diseño de EEUU para el área andina, que busca involucrar al país en el Plan Colombia. En esta confrontación, el MIE rodea al sistema político; no lo utiliza porque su experiencia política le demuestra que el sistema político, con toda su institucionalidad, está hecho más bien para neutralizar la lucha social que para potencializar las resistencias sociales.

Ahora bien, de la misma manera que en 1994 el MIE comprendió la real implicación que tiene el neoliberalismo para las comunidades indígenas, con la Ley de Desarrollo Agrario, para el año 2006, el MIE había procesado las implicaciones que tendría la globalización neoliberal desde una transición de su eje conceptual de la lucha por la tierra, a la defensa del territorio.

Es esta categoría de territorio, la que le permite al MIE comprender las reales implicaciones de la globalización neoliberal. Las comunidades indígenas y las nacionalidades que habitan sobre todo en territorios ricos en biodiversidad, petróleo, agua y madera, empiezan a sufrir el asedio de las corporaciones transnacionales, que hacen *tabula rasa* de la legislación vigente, incluido el convenio 169 de la OIT y ratificado por el Congreso ecuatoriano en 1998, y que buscan la cooptación, o expulsión de estas nacionalidades indígenas de sus territorios ancestrales.

La aprobación de leyes que reconocen los derechos indígenas, entre ellos los derechos colectivos codificados en la Constitución de la república, y en el Convenio 169 de la OIT, en vez de garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, generan un espacio de conflicto entre las nacionalidades indígenas, y las corporaciones y un Estado hecho más para defender a estas corporaciones que a su propia población. Se trata de un efecto no deseado, pero inherente a la dinámica de la globalización neoliberal. Al extender varios derechos a las nacionalidades indígenas, como por ejemplo el derecho a la consulta previa y acuerdo de la organización comunitaria para el desarrollo de actividades extractivas por parte de las corporaciones transnacionales, se le reconoce a la comunidad un status jurídico que genera un campo de conflicto de intereses.

Las corporaciones transnacionales que acceden a los derechos de explotación, sea de petróleo, de biodiversidad, de madera, o de agua, tienen que necesariamente negociar con las organizaciones indígenas. Es justamente en virtud de este proceso que las corporaciones crean los departamentos de relaciones comunitarias, o también denominados de responsabilidad social. Estos departamentos son los encargados de negociar con las comunidades y nacionalidades indígenas y de crear prácticas clientelares en virtud de las cuales las poblaciones de las nacionalidades indígenas se convierten en dependientes, incluso para su sobrevivencia alimentaria, de los departamentos de relaciones comunitarias de las corporaciones transnacionales.

Detrás de estas dinámicas está la lucha por el control de los recursos estratégicos que están en los territorios indígenas. Ya no es solamente la tierra como factor económico y vinculado a la producción agraria aquello que está en juego en el neoliberalismo, ahora es el territorio como espacio de vivencia de las nacionalidades indígenas el objeto de disputa.

Neoliberalismo y derechos comunitarios son incompatibles. Los casos de conflicto por la lucha territorial se multiplican en la amazonía ecuatoriana y en la costa. En la amazonía, los pueblos de la comunidad kichwa de Sarayacu se enfrentan, tanto a la petrolera CGC cuanto al Estado que en su afán de obtener recursos fiscales ha entregado a la explotación petrolera vastas regiones habitadas por pueblos y naciones indígenas. Es el caso también de la nación Huao que se enfrenta a la petrolera Petrobras en la región del Yasuní, o es el caso de los pueblos Chachis, en la costa ecuatoriana que se enfrentan a las empresas madereras. Las presiones para que las comunidades y nacionalidades firmen contratos de servicios ambientales, como paso previo para la biopiratería, o a la explotación de la biodiversidad, se multiplican. El territorio es el nuevo punto de conflicto y el espacio de convergencia de las corporaciones, el Estado, y las elites.

El MIE cambia los ejes de su agenda en virtud del apareamiento de este nuevo escenario de confrontación. A medida que avanza la globalización neoliberal, más vulnerables son los pueblos y las nacionalidades indígenas que habitan en territorios de alta biodiversidad, cuencas acuíferas, bosques primarios. A mediados del año 2003, el MIE tiene que enfrentarse a un proyecto de Ley de Biodiversidad, realizado por las agencias transnacionales de la ecología, como Conservation International, y WWF, y que atenta directamente en contra de los territorios de las comunidades y nacionalidades indígenas.

La propuesta de Ley de Biodiversidad es el equivalente de aquella propuesta de Desarrollo Agrario, hecha en 1994 por el gobierno neoliberal de Durán Ballén, una ley que motivó uno de los levantamientos indígenas más fuertes. De esta misma manera, esta propuesta de Ley de Biodiversidad pone en alerta al MIE, que comprende que el espacio de disputa política ahora se traslada a la defensa del territorio.

Durante los años 2003 y 2004, a pesar de sufrir el embate represivo del gobierno de Lucio Gutiérrez, y de las estrategias de división hechas por ese gobierno con la ayuda del Banco Mundial, el MIE empieza un proceso de discusión, análisis y procesamiento de la información existente sobre la globalización de la biodiversidad, el agua, los conocimientos ancestrales y los patrimonios genéticos. En estos debates que se realizan en las comunidades y en las organizaciones de base, el MIE va comprendiendo y descifrando los alcances que tiene el discurso de los servicios ambientales, como mecanismo de puesta en valor de la naturaleza, y comprende que la disputa ahora será por el agua, la biodiversidad, y los conocimientos ancestrales.

De hecho, para mediados del año 2004, la CONAIE con sus equipos de trabajo tiene listo el proyecto de "Ley para la protección y uso sustentable de la Biodiversidad", que es el producto de talleres de trabajo con las organizaciones de base, y que presenta al Congreso ecuatoriano como ley alternativa a aquella que se había presentado anteriormente.

Este proyecto de Ley trata de confrontar el proyecto de Ley de Biodiversidad que había sido tratado en una primera discusión por el Congreso ecuatoriano en el año 2003. La organización indígena sustenta con los criterios de ancestralidad la noción de soberanía sobre los territorios indígenas, y propone mecanismos de

objeción cultural para defenderse de las estrategias de intervención tanto del Estado cuanto de las corporaciones transnacionales, son los principios de diversidad cultural, sacralidad del territorio, integralidad del territorio con la población como sujetos culturales y políticos, los que permiten al MIE avanzar en su conceptualización del territorio como locus político.

Cuando las elites ecuatorianas proponen el TLC con EEUU, el MIE comprende que más allá de la mesa agrícola, lo que está en juego es el territorio, y está en juego porque lo que se va a transformar con el TLC, no son los aranceles ni las salvaguardas ni los impuestos, es el Estado. Y ante un Estado neoliberal los territorios indígenas son vulnerables. Si en la actual legislación no existen mecanismos jurídicos de protección a los territorios indígenas, peor aún en el Estado neoliberal, en el que el sujeto de derecho no son las personas sino las corporaciones.

La defensa del territorio es la defensa de la cultura, es la defensa de la historia, de la memoria y del futuro. Los pueblos indígenas comprenden que si Ecuador firma el TLC con EEUU, ellos están condenados a desaparecer, y como aquellas estirpes de Cien Años de Soledad, no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.

GLOSARIO DE SIGLAS

CONADE- Consejo Nacional de Desarrollo

CONAIE- Conferdación de nacionalidades Indígenas Del Ecuador

CONAM- Consejo Nacional de Modernización

FMI- Fondo Monetário Internacional

INDA- Instituto Nacional de Desarrollo Agrario

MIE- Mobilização Indígena do Ecuador

OIT- Organización Internacional do Trabajo

TLC- Tratado de Libre Comercio